



Consejo de  
Transparencia y  
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

## RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0337/2017

FECHA: 01 de diciembre de 2017

**ASUNTO:** Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0337/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

### I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito registrado el 3 de mayo de 2017 en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura, el ahora reclamante, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-, solicitó a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura la siguiente información pública: "Acuerdo sobre Inversiones en Infraestructuras para el periodo 2017-20".

Transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber recibido contestación alguna su solicitud de acceso a la información, el interesado la entiende desestimada por silencio administrativo y, en consecuencia, por escrito registrado en esta Institución el 4 de septiembre de 2017 presentó una reclamación al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG. En concreto, señala que "deseo tener acceso al documento del "Acuerdo sobre Inversiones en Infraestructuras para el periodo 2017-20", que aparece mencionado en esta información de la web de la Junta de Extremadura: <http://www.iuntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=21828#.Wak1i-SghQk>. El mismo día 3 de mayo de 2017, recibí un mensaje de correo electrónico donde se me informaba de que la solicitud ha sido trasladada al órgano competente. Sin embargo, a pesar de que han pasado cerca de cuatro meses desde la presentación de la solicitud, todavía no he recibido la información".

[ctbg@consejodetransparencia.es](mailto:ctbg@consejodetransparencia.es)



2. El 4 de septiembre de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se trasladó a la Junta de Extremadura el expediente de referencia, a fin de que, una vez remitido al órgano competente se formularan las alegaciones que se estimasen por convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en que fundamentar las posibles alegaciones que se hubiesen planteado.

En la fecha en la que se dicta la presente Resolución no se ha recibido en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegación alguna en el expediente de referencia.

## II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. Asimismo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 24.6 de la LTAIBG, en relación con el apartado 2 de su Disposición adicional cuarta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Junta de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.
3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en precisar el objeto de la solicitud originaria de acceso a la información cuya falta de contestación ha motivado la interposición de esta Reclamación. Como se recordará, según consta en los antecedentes, el ahora reclamante había solicitado acceso al "Acuerdo sobre Inversiones en Infraestructuras para el periodo 2017-20".

La Disposición adicional duodécima, rubricada "Acuerdos Estratégicos Plurianuales de Infraestructuras", de la Ley 1/2017, de 27 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017, dispone lo siguiente:

«En aras de fomentar la equidad social y económica, la Junta de Extremadura elaborará un Acuerdo Estratégico Plurianual de Inversión en cada una de las siguientes infraestructuras:



- Viales e hidráulicas.
- Transportes.
- Agrarias.

Los Acuerdos serán remitidos a la Asamblea de Extremadura antes del 15 de mayo de 2017 para su debate y aprobación, por mayoría de 2/3 de la Cámara. En dichos Acuerdos se concretarán las infraestructuras públicas de interés regional que se consideren prioritarias, con base en criterios objetivos que deberá determinarse en función de las particularidades de cada una de las materias, referidos tanto a la inversión como al orden de prelación en la ejecución de las mismas».

En cumplimiento de este mandato legal, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 2 de mayo de 2017 se adoptó el *Acuerdo sobre Inversiones en Infraestructuras para el periodo 2017-20* que, posteriormente se remitió a la Asamblea de Extremadura para su debate y aprobación, por mayoría de 2/3. En dicho Acuerdo figura el listado de infraestructuras a ejecutar y un presupuesto estimado, según se desprende de la información facilitada por la propia Junta de Extremadura en su página web oficial [disponible en <http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=21828#.WiEiKVKPK1s>].

4. Centrada en estos términos la pretensión del ahora recurrente, debemos recordar que, en el caso concreto de la Junta de Extremadura, el artículo 1.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, prevé que el objeto de la misma es la «implantación de una nueva forma de relación del Gobierno y la Administración pública con la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado gobierno abierto». Principio este último que ha de informar la buena administración y el buen gobierno, siendo definido por el artículo 4.a) de la citada norma autonómica en el sentido de que «supone canalizar el intercambio de información a través de procesos de escucha activa y diálogo con la ciudadanía, encaminados a la participación y a la implicación de esta en la toma de decisiones de carácter público y comprende el derecho de toda persona a que la Administración trate sus asuntos, imparcial y equitativamente, dentro de un plazo razonable ya acceder a la información en los términos previstos en esta Ley».

En este sentido, desde la perspectiva de la legislación básica sobre la materia, cabe recordar que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Mientras que en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como

*“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.*



A tenor de los preceptos mencionados cabe recordar que el concepto de información pública que recoge la LTAIBG, en función del cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” -artículo 1 de la LTAIBG-.

5. El ejercicio del derecho de acceso a la información se ha configurado por el legislador básico de transparencia, así como por el legislador autonómico de desarrollo, como un derecho de amplio espectro. Esta configuración ha sido reiterada por los Tribunales de Justicia que ya han tenido ocasión de pronunciarse en diferentes ocasiones en el sentido de que el acceso a la información debe entenderse en un sentido amplio y que las restricciones al mismo deben ser excepcionales. De este modo, a mero título de ejemplo, la Sentencia 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 tras señalar que la LTAIBG «en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública» sostiene que «la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado».

Por su parte, la Sentencia 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 afirma que «[e]l derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. [...] Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia».

En el caso que ahora nos ocupa existe un evidente interés público en la información solicitada, situación que se refleja bien en el hecho de que el precitado Acuerdo de Infraestructuras debe ser debatido y aprobado por dos tercios del parlamento autonómico. Además, cabe advertir que la administración autonómica no ha planteado que concurra ninguna causa de inadmisión de las previstas en el artículo 18 de la LTAIBG, así como tampoco límite alguno de los enumerados en el artículo 14 de la misma norma. De este modo, atendiendo a la naturaleza de la información objeto de la solicitud de acceso, la interpretación amplia del derecho



de acceso a la información que contempla la LTAIBG y la interpretación que de la misma hacen los Tribunales de Justicia, la presente reclamación debe ser estimada.

### III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

**PRIMERO: ESTIMAR** la Reclamación presentada por [REDACTED], por cuanto su objeto se trata de información pública de acuerdo con lo definido en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

**SEGUNDO: INSTAR** a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura a que en el plazo máximo de diez días proporcione a [REDACTED] la información solicitada y no satisfecha, remitiendo a este Consejo en igual plazo copia de la información trasladada al reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO  
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE  
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda

